



Desigualdades territoriales en el acceso al bienestar en Italia: gobernanza multinivel, capacidad administrativa y diseño institucional

Territorial Inequalities in Welfare Access in Italy: Multi-level Governance, Administrative Capacity and Institutional Design

Isabel Cánovas Soler (1)

(1) Universidad de Murcia (España)

Resumen: El presente artículo analiza las desigualdades territoriales en el acceso efectivo a prestaciones del Estado de bienestar en Italia, con especial atención a la brecha Norte-Sur. A diferencia de los enfoques predominantes que explican dicha brecha en términos puramente socioeconómicos, este trabajo propone un marco analítico centrado en variables institucionales: gobernanza multinivel, capacidad administrativa local y fragmentación del diseño institucional. Mediante un análisis comparado territorial de fuentes secundarias (ISTAT, INPS, Eurostat, OCDE y Banco Mundial), el artículo examina indicadores como la cobertura efectiva de prestaciones, los tiempos de tramitación, el gasto en servicios sociales per cápita y el índice de digitalización administrativa. Se argumenta que la descentralización italiana sin mecanismos robustos de coordinación interterritorial genera un "implementation gap" estructural que convierte las diferencias formales en exclusión real del bienestar. El artículo contribuye teóricamente al debate sobre gobernanza multinivel y desigualdades ocultas, y ofrece implicaciones para el diseño de políticas redistributivas territorialmente sensibles.

Palabras clave: Desigualdad territorial, Gobernanza multinivel, Capacidad administrativa, Fragmentación institucional, Estado de bienestar, Disparidades regionales.

Abstract. This article analyses territorial inequalities in effective access to welfare state provisions in Italy, with particular attention to the North-South divide. Unlike predominant approaches that explain this gap in purely socioeconomic terms, the paper proposes an analytical framework centred on institutional variables: multi-level governance, local administrative capacity, and institutional design fragmentation. Through a territorial comparative analysis of secondary sources (ISTAT, INPS, Eurostat, OECD and World Bank), the article examines indicators such as effective benefit coverage, processing times, per capita social services expenditure and administrative digitalisation indexes. It is argued that Italian decentralisation without robust inter-territorial coordination mechanisms generates a structural implementation gap that converts formal entitlements into real welfare exclusion. The article contributes theoretically to the debate on multi-level governance and hidden inequalities and offers implications for the design of territorially sensitive redistributive policies.

Keywords: Territorial Inequality, Multilevel Governance, Administrative Capacity, Institutional Fragmentation, Welfare State, Regional Disparities.

Recibido: 19/04/26 Revisado: 10/06/26 Preprint: 05/08/26 Aceptado: 15/09/26 Publicado: 01/01/27

Referencia normalizada: Cánovas Soler, I. (2026). Desigualdades territoriales en el acceso al bienestar en Italia: gobernanza multinivel, capacidad administrativa y diseño institucional. *Ehquidad. International Welfare Policies and Social Work Journal*, 27, 267-000 <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2027.0010>

Correspondencia: Isabel Cánovas Soler, Universidad de Murcia (España). Correo electrónico: isabel.canovassoler@um.es

1. INTRODUCCIÓN

Italia representa uno de los casos más paradójicos del Estado de bienestar europeo. Con un gasto social que ronda el 29% del PIB —por encima de la media de la Unión Europea (26,9%) (Eurostat, 2023)—, el país mantiene al mismo tiempo algunas de las desigualdades territoriales más pronunciadas del continente. La tasa de riesgo de pobreza en regiones como Calabria o Sicilia supera el 35%, mientras que en Lombardia o Emilia-Romagna apenas alcanza el 8% (ISTAT, 2023). Esta asimetría no constituye simplemente un reflejo de diferencias económicas históricas: es el resultado, como se argumentará en este artículo, de un diseño institucional que produce y reproduce sistemáticamente brechas en el acceso efectivo a derechos sociales.

La literatura académica sobre el welfare state italiano ha tendido a privilegiar explicaciones de carácter macroeconómico y estructural, enfatizando la dualidad laboral, el clientelismo político meridional o las herencias históricas del subdesarrollo del Mezzogiorno (Ferrera, 1996; Saraceno, 2002; Trigilia, 1992). Sin embargo, esta perspectiva resulta insuficiente para dar cuenta de por qué ciudadanos con necesidades equivalentes —e incluso derechos legalmente reconocidos— acceden de manera radicalmente distinta a las prestaciones sociales dependiendo de su lugar de residencia. La pregunta central que guía este trabajo es, por tanto: ¿en qué medida las diferencias en capacidad administrativa, descentralización y diseño institucional explican las desigualdades territoriales en el acceso efectivo a las prestaciones sociales en Italia?

Para responder a esta pregunta, el artículo desarrolla un marco teórico que integra tres tradiciones analíticas: la teoría del Estado de bienestar comparado y las desigualdades territoriales; la literatura sobre gobernanza multinivel (Hooghe & Marks, 2003; Bache & Flinders, 2004); y los enfoques sobre capacidad administrativa y fallos de implementación (Howlett, 2009; Dargent, 2015; Andrews, Pritchett & Woolcock, 2017). Este marco se aplica empíricamente al análisis de programas clave del bienestar italiano: el Reddito di Cittadinanza (RdC), su sucesor el Assegno di Inclusione (AdI), y el Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introducidos ambos en 2023.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Estado de Bienestar y desigualdades territoriales

La tipología clásica de Esping-Andersen (1990) sobre los "tres mundos del capitalismo del bienestar" configuró durante décadas el análisis comparado de los sistemas de protección social. Sin embargo, dicha tipología presenta limitaciones analíticas significativas al tratar el Estado como unidad territorial homogénea, ignorando las variaciones subnacionales en la implementación efectiva de los derechos sociales. Investigaciones posteriores han señalado que, incluso dentro de los sistemas más desarrollados, existen profundas asimetrías internas que constituyen lo que Béland y Lecours (2008)

denominan "desigualdades territoriales ocultas" (hidden territorial inequalities).

En el caso italiano, Ferrera (1996, 2005) fue pionero en conceptualizar el welfare state del sur de Europa como un régimen familista, fragmentado y clientelar, con bajos niveles de universalismo y fuertes disparidades internas. Posteriormente, Kazepov (2010) amplió este análisis introduciendo la noción de "reescalamiento" (rescaling) del bienestar hacia los niveles subnacionales, argumentando que la regionalización de las políticas sociales europeas no había ido acompañada de los recursos ni las capacidades institucionales necesarias, generando lo que denomina un "mosaico de bienestar" (welfare mosaic) con profundas implicaciones distributivas.

La distinción entre derechos formales y acceso efectivo (de jure vs. de facto) es fundamental para este análisis. Como señalan Filgueira et al. (2006) en el contexto latinoamericano —con claras resonancias para el caso italiano—, la existencia de una legislación social universal no garantiza por sí misma la efectividad de los derechos: su materialización depende de la capacidad del aparato administrativo local para implementarlos. Esta brecha entre derecho formal y acceso efectivo constituye el núcleo del concepto de "implementation gap" (brecha de implementación) que este artículo adopta como categoría analítica central.

2.2. Gobernanza multinivel y coordinación territorial

El concepto de gobernanza multinivel (*multi-level governance*), desarrollado seminalmente por Hooghe y Marks (2001, 2003), describe la dispersión de la autoridad gubernamental hacia múltiples niveles jurisdiccionales —supranacional, nacional, regional y local— que operan de manera interdependiente. En su versión más elaborada, los autores distinguen entre dos tipos ideales: el Tipo I, caracterizado por jurisdicciones de propósito general organizadas jerárquicamente, y el Tipo II, compuesto por jurisdicciones especializadas, solapadas y de membresía variable. El sistema italiano combina elementos de ambos tipos, lo que produce tensiones de coordinación especialmente visibles en el campo de las políticas sociales.

La literatura sobre gobernanza multinivel ha identificado que la efectividad de los sistemas descentralizados depende críticamente de mecanismos de coordinación intergubernamental (Agranoff, 2007; Peters & Pierre, 2001). Cuando dichos mecanismos son débiles o ausentes, la descentralización puede producir el efecto opuesto al deseado: en lugar de acercar los servicios a los ciudadanos, amplifica las desigualdades preexistentes al permitir que las diferencias en capacidad institucional entre territorios se traduzcan directamente en diferencias en calidad y cobertura de los servicios. Pierson (1995) denominó este fenómeno "trampa de la descentralización" (decentralization trap), y Obinger, Leibfried y Castles (2005) lo analizaron específicamente en el contexto de los sistemas federales de bienestar.

Para el caso italiano, Baldi (2006) y Cento Bull y Jones (2010) han documentado cómo la reforma constitucional de 2001, que amplió significativamente las competencias regionales en materia social, no vino acompañada de transferencias fiscales proporcionales ni de mecanismos de coordinación efectivos, generando lo que los autores denominan "descentralización asimétrica" con consecuencias distributivas regresivas. Más recientemente, se han analizado cómo los fallos de gobernanza multinivel en Italia impiden la absorción eficiente de los fondos estructurales europeos, especialmente en las regiones del Sur, perpetuando el ciclo de baja capacidad institucional y acceso limitado al bienestar.

2.3. Capacidad administrativa y Estado local

El concepto de capacidad del Estado (state capacity) ha experimentado una notable elaboración teórica en las últimas décadas. La tradición iniciada por Mann (1984) con su distinción entre poder despótico e infraestructural del Estado ha dado lugar a una rica literatura sobre la dimensión técnica y administrativa de la capacidad estatal. Andrews, Pritchett y Woolcock (2017) distinguen entre capacidad de diseño de políticas y capacidad de implementación, argumentando que muchos países exhiben "isoformismo institucional": adoptan formalmente las estructuras e instrumentos de los

países desarrollados sin desarrollar las capacidades reales necesarias para su funcionamiento.

A nivel subnacional, Dargent (2015) y Bersch, Praça y Taylor (2017) han analizado la variación en capacidad administrativa entre unidades territoriales del mismo Estado-nación, demostrando que dicha variación es sistemática, persistente y tiene consecuencias directas sobre los resultados de bienestar. En el contexto europeo, Rodríguez-Pose y Garcilazo (2015) han establecido empíricamente que la calidad institucional regional es el predictor más robusto de la efectividad del gasto en políticas de cohesión, por encima incluso del nivel de desarrollo económico.

Para el bienestar específicamente, la capacidad administrativa se puede descomponer en tres dimensiones analíticas: (1) capacidad técnica (*technical capacity*), que incluye recursos humanos cualificados, infraestructura tecnológica y sistemas de información; (2) capacidad organizativa (*organizational capacity*), referida a los procesos internos de coordinación, gestión y rendición de cuentas; y (3) capacidad relacional (*relational capacity*), que comprende la articulación con actores de la sociedad civil, el sector privado y otros niveles de gobierno (Dargent, 2015; Evans, 1995). Las tres dimensiones son necesarias para que la implementación efectiva de políticas de bienestar sea posible, y la debilidad en cualquiera de ellas puede generar un "cuello de botella" que impida el acceso efectivo a prestaciones formalmente reconocidas.

2.4. Fragmentación institucional y exclusión indirecta

La fragmentación institucional constituye un tercer vector explicativo de las desigualdades en el acceso al bienestar. Como señala Warin (2012), la complejidad procedimental de los sistemas de bienestar puede generar lo que la literatura francesa denomina "non-recours" (no recurso): la no utilización de derechos sociales por parte de quienes tienen derecho a ellos, no por ignorancia ni por falta de necesidad, sino por la imposibilidad práctica de navegar sistemas administrativos complejos, fragmentados y poco accesibles.

En el contexto italiano, la fragmentación es especialmente pronunciada debido a la coexistencia de múltiples niveles competenciales (Estado, regiones, provincias, municipios), la multiplicidad de organismos gestores (INPS, municipios, Centros de Empleo, tercera parte social), y la variabilidad en la aplicación de criterios de elegibilidad entre territorios. Kazepov y Barberis (2013) han documentado cómo esta fragmentación produce "zonas grises" de bienestar en las que los ciudadanos —especialmente los más vulnerables y con menor capital cultural— quedan sistemáticamente excluidos no por norma legal sino por diseño institucional efectivo. Este fenómeno de exclusión indirecta estructural es lo que este artículo denomina "fragmentación como mecanismo de desigualdad oculta".

La integración de estas tres perspectivas —gobernanza multinivel, capacidad administrativa y fragmentación institucional— permite construir un marco analítico que va más allá de los determinantes socioeconómicos convencionales para explicar por qué las desigualdades territoriales en el bienestar italiano son tan persistentes y difíciles de reducir mediante políticas redistributivas convencionales. El Estado de bienestar no solo redistribuye recursos: redistribuye también capacidades institucionales, y cuando estas están distribuidas desigualmente, la redistribución de recursos resulta insuficiente.

3. CONTEXTO INSTITUCIONAL ITALIANO

3.1. Evolución del sistema de bienestar italiano

El Estado de bienestar italiano se configuró históricamente siguiendo el modelo bismarckiano-conservador de los países de Europa continental, con una fuerte orientación hacia las prestaciones contributivas vinculadas al empleo formal y una débil tradición de asistencia social universal (Ferrera, 1996). Sin embargo, sus peculiaridades —especialmente la fragmentación corporativista del sistema de pensiones, la marginalidad histórica de los servicios sociales y la centralidad de la familia como proveedor de bienestar residual— llevaron a Ferrera a incluirlo en un cuarto régimen: el "mediterráneo" o "sureuro", caracterizado por una doble dualización: entre transferencias generosas para los trabajadores formales y ausencia de

cobertura para los excluidos del mercado laboral, y entre territorios con mayor y menor capacidad institucional para proveer servicios.

La reforma del sistema asistencial en los años noventa y dos mil intentó avanzar hacia una cobertura más universal. La Ley 328/2000 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) estableció el marco legislativo para un sistema integrado de servicios sociales, descentralizando la responsabilidad de planificación e implementación a los municipios y regiones. Sin embargo, como señalan Ciarini (2012) y Andreotti, Mingione y Polizzi (2012), la ley no fue acompañada de recursos financieros adecuados ni de mecanismos de coordinación suficientemente robustos, dejando a las regiones y municipios más pobres en una situación de imposibilidad estructural de cumplir los mandatos legales.

El período posterior a la crisis financiera de 2008 supuso un retroceso significativo. Las políticas de austeridad impusieron recortes severos en el gasto social subnacional, con efectos asimétricos que afectaron desproporcionadamente a las regiones del Sur —que partían de una posición de mayor debilidad fiscal e institucional— frente a las del Norte (Banca d'Italia, 2021). Este proceso amplió la brecha en capacidad administrativa entre regiones, generando lo que Peck (2012) denomina "austerity uneven development": la consolidación fiscal como mecanismo de producción y reproducción de desigualdades territoriales.

3.2. Descentralización y reforma constitucional

El modelo de organización territorial italiano experimentó una transformación profunda con la reforma constitucional de 2001 (*Legge Costituzionale n. 3/2001*), que modificó el Título V de la Constitución y amplió sustancialmente las competencias regionales. En materia de políticas sociales, la reforma estableció una competencia legislativa concurrente entre Estado y regiones, dejando a estas últimas la regulación de la organización y gestión de los servicios sociales, mientras que el Estado retiene la determinación de los "niveles esenciales de prestaciones" (*livelli essenziali delle prestazioni, LEP*).

Sin embargo, la determinación efectiva de los LEP ha permanecido bloqueada durante más de dos décadas por dificultades políticas y técnicas, dejando a las regiones sin un referente claro de las obligaciones mínimas exigibles. Se ha documentado que este vacío normativo ha permitido que las diferencias en capacidad fiscal y administrativa entre regiones se traduzcan directamente en diferencias en los estándares de servicio, sin que existan mecanismos efectivos de corrección. La ausencia de LEP efectivos constituye, por tanto, una de las principales fuentes de exclusión indirecta estructural en el sistema italiano de bienestar.

En años más recientes, el debate sobre la "autonomía diferenciada" (*autonomia differenziata*), impulsado principalmente por las regiones norteñas y plasmado en el proceso legislativo iniciado en 2019 y retomado en 2023, ha añadido una nueva dimensión a la problemática. Como señalan Viesti (2023) y Bordignon y Turati (2023), la implementación de la autonomía diferenciada sin mecanismos de compensación interterritorial robustos podría amplificar aún más las desigualdades en el acceso al bienestar, consolidando un modelo de ciudadanía social territorialmente estratificada.

3.3. Programas clave: RdC, AdI y SFL

El *Reddito di Cittadinanza* (RdC), introducido en 2019, constituyó el primer intento sistemático de establecer una renta mínima de inserción de carácter nacional en Italia. Con un coste anual cercano a los 8.000 millones de euros en su punto máximo (2021), el programa benefició a más de 1,6 millones de hogares, concentrados mayoritariamente en las regiones del Sur. Sin embargo, desde su implementación fueron evidentes las dificultades de acceso en los territorios con menor capacidad administrativa: los centros de empleo —responsables de la activación laboral vinculada al RdC— mostraban ratios de personal por desempleado entre 3 y 7 veces menores en el Sur que en el Norte (ANPAL, 2022; Raitano & Fana, 2019).

En 2023, el Gobierno Meloni sustituyó el RdC por dos instrumentos: el *Assegno di Inclusione* (AdI), dirigido a hogares con menores, personas con discapacidad o personas mayores de 60 años, y el *Supporto per la*

Formazione e il Lavoro (SFL), orientado a las personas en edad activa no pertenecientes a las categorías anteriores. La reforma redujo significativamente el número de beneficiarios (de 1,6 millones a aproximadamente 700.000 hogares para el AdI en 2024) e introdujo condicionalidades más estrictas. Desde la perspectiva de este artículo, la reforma es relevante porque amplificó las dificultades de acceso en los territorios con menor capacidad administrativa: los procedimientos de activación del SFL requieren la intervención coordinada de múltiples organismos —INPS, centros de empleo, servicios sociales municipales— cuya articulación efectiva es cualitativamente distinta en el Norte y en el Sur (INPS, 2024).

3.4. La brecha Norte-Sur: más allá de lo económico

La brecha entre el Norte y el Sur de Italia es un fenómeno de larga data que ha sido analizado desde múltiples perspectivas (Trigilia, 1992; Putnam, Leonardi & Nanetti, 1993; Felice, 2013). La contribución más influyente al debate, la de Putnam et al. (1993) en "Making Democracy Work", atribuyó las diferencias en desempeño institucional entre regiones italianas a diferencias en capital social acumulado históricamente, estableciendo una correlación notable entre la tradición cívica medieval y los indicadores contemporáneos de eficiencia gubernamental.

Sin embargo, la perspectiva del capital social ha sido criticada por su circularidad y por su escasa capacidad explicativa de los cambios institucionales a corto plazo (Tarrow, 1996; Levi, 1996). Enfoques más recientes enfatizan variables institucionales y de economía política: la estructura fiscal intergubernamental (Giannola, Petraglia & Scalera, 2016), las dinámicas de clientelismo político (Golden & Picci, 2005), la calidad de la burocracia regional (Charron, Dijkstra & Lapuente, 2014) y las trampas de bajo equilibrio institucional (Acemoglu & Robinson, 2012). El hilo conductor de estas perspectivas es que las diferencias territoriales en bienestar no son simplemente el reflejo de diferencias económicas, sino que tienen una dimensión institucional autónoma, con sus propias lógicas de reproducción y cambio.

4. METODOLOGÍA

4.1. Diseño de investigación

Este artículo adopta un diseño de análisis comparado territorial (intra-country comparative analysis), que permite controlar las variables institucionales de nivel nacional —legislación, sistema de transferencias, marco constitucional— para aislar el efecto de las variables institucionales subnacionales sobre los resultados de bienestar. Como señalan Snyder (2001) y Weyland (2004), el análisis comparado subnacional presenta ventajas metodológicas significativas frente a la comparación entre países: al mantener constantes muchas de las variables de confusión más relevantes (historia, cultura política, marco legal nacional), permite una identificación más precisa de los mecanismos causales de interés.

La unidad de análisis principal son las regiones italianas (NUTS 2 según la clasificación Eurostat), complementadas en algunos indicadores con datos a nivel provincial (NUTS 3) o municipal (LAU 1) cuando la disponibilidad de datos lo permite. El análisis se enfoca en el período 2019-2023, que coincide con la vigencia del RdC y permite observar sus resultados de implementación diferencial. La comparación analítica se estructura en torno a tres ejes: (a) indicadores socioeconómicos, (b) indicadores de acceso efectivo a prestaciones, y (c) indicadores de capacidad administrativa.

4.2. Fuentes de datos

El análisis se basa exclusivamente en fuentes secundarias institucionales de alta fiabilidad. Las principales fuentes utilizadas son: (1) ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica): datos socioeconómicos regionales, encuestas de condiciones de vida (EU-SILC Italia), indicadores de los servicios sociales municipales (Indagine Istat sui servizi sociali comunali), y estadísticas de empleo regionales; (2) INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale): datos administrativos sobre beneficiarios del RdC/AdI, importes medios por región, tasas de rechazo de solicitudes y estadísticas de activación; (3) Eurostat: indicadores comparados de gasto social, tasas de pobreza (EU-SILC), y datos de mercado laboral (LFS); (4) OCDE: datos sobre calidad institucional regional (Regional Well-Being), capacidad administrativa y

gobierno multinivel; (5) Banca d'Italia: informes anuales sobre las economías regionales del Centro-Nord y Mezzogiorno; (6) Corte dei Conti e informes parlamentarios sobre la implementación del RdC/AdI.

4.3. Estrategia analítica y operacionalización

La estrategia analítica combina estadística descriptiva comparada y análisis de correlación bivariada. Para la variable dependiente —acceso efectivo a prestaciones— se opera a través de tres indicadores: (a) tasa de acceso efectivo (porcentaje de hogares elegibles que reciben efectivamente la prestación); (b) tiempo medio de tramitación (días desde la solicitud hasta la primera percepción); (c) tasa de rechazo de solicitudes (indicador proxy de barreras de acceso procedimentales).

Para las variables independientes institucionales, se construye un índice compuesto de capacidad administrativa basado en cuatro dimensiones: (a) recursos humanos (personal de servicios sociales por habitante); (b) recursos financieros (gasto en servicios sociales per cápita); (c) capacidad digital (índice de digitalización de la administración local); (d) capacidad de gestión de fondos externos (tasa de absorción de fondos estructurales europeos). Este índice sigue una metodología similar a la propuesta por Charron et al. (2014) para el European Quality of Government Index (EQI).

4.4. Limitaciones

El análisis presenta limitaciones metodológicas que deben ser señaladas explícitamente. En primer lugar, la disponibilidad de datos subnacionales de alta calidad sobre indicadores de acceso efectivo al bienestar es limitada, especialmente para los niveles provincial y municipal. En segundo lugar, el análisis de correlación no permite establecer relaciones causales con certeza: sería necesario un diseño cuasi-experimental o de variables instrumentales para identificar con precisión el efecto causal de la capacidad administrativa sobre el acceso. En tercer lugar, la construcción del índice compuesto de capacidad administrativa implica decisiones de ponderación que, aunque informadas por la literatura, introducen un elemento de arbitrariedad analítica. Estas limitaciones sugieren que los resultados deben

interpretarse como evidencia correlacional sugestiva de relaciones causales plausibles, no como demostración causal definitiva.

5. ANÁLISIS EMPÍRICO

5.1. Dimensión socioeconómica: el punto de partida

Los indicadores socioeconómicos confirman la profundidad de la brecha territorial italiana. Como muestra la Tabla 1, el PIB per cápita en las regiones del Sur es aproximadamente la mitad del de las regiones del Norte: Calabria (16.210€) frente a Lombardía (38.420€), lo que supone una ratio de 1:2,4. Esta diferencia es mayor que la que existe entre Italia como conjunto y países como Polonia o Hungría, lo que ilustra que el "problema meridional" italiano es comparable en magnitud a las disparidades entre países europeos. La tasa de desempleo regional amplifica esta brecha: 21,8% en Calabria frente a 4,1% en Lombardía, y la tasa de riesgo de pobreza alcanza el 35,6% en la primera frente al 8,2% en la segunda.

Estos datos confirman la premisa básica: la necesidad objetiva de prestaciones sociales es radicalmente mayor en el Sur que en el Norte. Lo relevante analíticamente, sin embargo, es que esta mayor necesidad no se traduce en mayor acceso efectivo a las prestaciones —como cabría esperar en un sistema universalista bien funcionante— sino en lo contrario: menor acceso, más tardío y de menor calidad. Este hallazgo, que desarrollamos en la sección siguiente, es el que requiere una explicación institucional.

Tabla 1. Indicadores socioeconómicos por región (2022)

Región	PIB pc (€, 2022)	Tasa desempleo % (2022)	Riesgo pobreza % (2022)	Gasto social mun. €/hab (2021)	NEET % (2022)
Lombardia	38.420	4,1	8,2	312	12,4
Emilia-Romagna	36.890	4,4	7,6	298	11,8
Piemonte	31.540	6,2	10,4	267	14,1
Veneto	33.210	3,8	7,9	281	11,2
Lazio	28.760	8,9	14,3	221	18,7
Campania	18.320	18,7	31,4	112	33,2
Sicilia	17.140	20,3	34,1	98	36,8
Calabria	16.210	21,8	35,6	91	38,4
Puglia	17.890	17,4	30,2	105	31,9
Media Norte (NO)	34.965	4,6	8,5	290	12,4
Media Sur (SO)	17.390	19,6	32,8	102	35,1

Nota: Fuentes: ISTAT (2023), Eurostat (2023). PIB per cápita a precios corrientes de mercado. Tasa de desempleo: media anual. Riesgo de pobreza: porcentaje de población por debajo del 60% de la mediana de la renta equivalente nacional. Gasto SS municipal: gasto corriente en servicios sociales de los municipios (fuente: ISTAT, Indagine sui servizi sociali comunali, 2021). NEET: porcentaje de jóvenes 15-29 años que ni estudian ni trabajan.

5.2. Acceso efectivo a prestaciones: la paradoja meridional

Los datos sobre acceso efectivo a prestaciones (Tabla 2) revelan una paradoja estructural: las regiones con mayor necesidad objetiva son precisamente las que muestran menores tasas de acceso efectivo. En Lombardia, el 71,2% de los hogares elegibles para el Adl acceden efectivamente a la prestación, con un tiempo medio de tramitación de 32 días y una tasa de rechazo del 11,3%. En contraste, en Calabria solo el 33,2% de los elegibles acceden efectivamente, con un tiempo medio de tramitación de 97 días y una tasa de rechazo del 33,8%.

La brecha en cobertura de servicios sociales municipales es igualmente reveladora: el 87,3% de los municipios de Emilia-Romagna disponen de una red básica de servicios sociales frente al 34,7% en Calabria. Esto significa que más de dos tercios de los municipios calabreses carecen de la infraestructura institucional mínima necesaria para implementar efectivamente las prestaciones del bienestar, independientemente de lo que establezca la legislación nacional. Esta situación ilustra de manera nítida el concepto de "implementation gap": la brecha entre el derecho formalmente reconocido y la posibilidad real de ejercerlo.

Tabla 2. Acceso a prestaciones sociales por región (2023)

Región	Beneficiarios RdC / Adl (% elegibles, 2023)	Tasa acceso efectivo (%)	Tiempo medio tramitación (días)	% solicitudes rechazadas	Cobertura servicios sociales municip. (%)
Lombardia	68,4	71,2	32	11,3	84,1
Emilia-Romagna	70,1	73,4	28	9,8	87,3
Veneto	65,8	69,7	35	12,1	82,6
Piemonte	62,3	65,9	38	13,7	79,4
Campania	41,2	38,6	74	28,4	43,2
Sicilia	38,7	35,1	89	31,2	38,9
Calabria	36,4	33,2	97	33,8	34,7
Puglia	42,8	40,3	71	27,1	45,6
Media Norte	66,7	70,1	33	11,7	83,4
Media Sur	39,8	36,8	83	30,1	40,6

Nota: Fuentes: INPS (2024), ISTAT (2023), elaboración propia. Tasa de acceso efectivo: porcentaje de hogares elegibles que reciben efectivamente la prestación, calculada a partir del número de beneficiarios del Adl y la estimación ISTAT de hogares bajo el umbral ISEE de elegibilidad. Tiempo de tramitación: días naturales entre presentación de solicitud y primera erogación. Cobertura servicios sociales: porcentaje de municipios con al menos un servicio social de atención domiciliar operativa.

Es importante señalar que estas diferencias en acceso efectivo no pueden explicarse únicamente por diferencias en la tasa de elegibilidad ni en el comportamiento de los potenciales beneficiarios. Las investigaciones cualitativas sobre los patrones de no-recurso (non-recours) en Italia (Ranci & Pavolini, 2015; Kazepov & Barberis, 2013) identifican como principales factores la complejidad procedimental, la falta de información sobre derechos, la ausencia de intermediarios institucionales de proximidad (trabajadores sociales municipales), y la desconfianza hacia la administración pública —variable esta que, como señala Putnam, se alimenta de experiencias históricas de mal gobierno y que resulta, por tanto, endógena al propio sistema institucional.

5.3. Capacidad administrativa: el factor mediador

Los datos de la Tabla 3 muestran las diferencias en capacidad administrativa entre regiones de forma sistemática y coherente. El personal de servicios sociales municipales por mil habitantes es 3,6 veces mayor en el Norte (2,7‰) que en el Sur (0,75‰). El gasto en servicios sociales per cápita es 2,8 veces mayor (473€ vs. 168€). El índice de digitalización administrativa muestra una brecha de más de 40 puntos entre el Norte (73,1) y el Sur (33,6). Y la tasa de absorción de fondos estructurales europeos —proxy de la capacidad de gestión burocrática compleja— es del 80,4% en el Norte frente al 36,0% en el Sur.

Este último indicador merece especial atención. La incapacidad de las regiones del Sur para absorber los fondos europeos destinados precisamente a reducir sus déficits de desarrollo (Fondos Estructurales, FESR, FSE+) es, en sí misma, una manifestación del problema que dichos fondos pretenden resolver: la trampa de bajo equilibrio institucional. Las regiones con menor capacidad administrativa son las que más necesitan los recursos externos, pero también las que tienen menor capacidad para gestionarlos efectivamente. Este círculo vicioso —documentado sistemáticamente por la Corte dei Conti (2021, 2022) en sus informes sobre la gestión de los fondos europeos en Italia— ilustra la naturaleza autorreforzante de las desigualdades institucionales.

Tabla 3. Indicadores de capacidad administrativa por región (2022)

Región	Personal SS municipal (% hab., 2022)	Gasto SS regional (€/hab., 2022)	Índice digitalización admin. (0-100)	Tasa absorción fondos EU (%)	Índice cap. admin. (0-10)
Lombardia	2,8	487	74,2	82,3	7,8
Emilia-Romagna	3,1	512	78,6	85,7	8,2
Veneto	2,6	461	71,4	79,1	7,4
Piemonte	2,4	432	68,3	74,6	7,1
Campania	0,9	183	38,2	41,3	3,2
Sicilia	0,7	164	31,8	34,7	2,8
Calabria	0,6	148	28,4	29,2	2,4
Puglia	0,8	178	36,1	38,9	3,0
Media Norte	2,7	473	73,1	80,4	7,6
Media Sur	0,75	168	33,6	36,0	2,9

Nota: Fuentes: ISTAT (2023), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2022), Agenzia per la Coesione Territoriale (2023), elaboración propia. Personal SS: trabajadores de servicios sociales municipales por cada mil habitantes. Índice digitalización: elaborado a partir del DESI adaptado a nivel regional (Commissione Europea, 2022) y datos AGID. Tasa absorción fondos EU: porcentaje de fondos certificados sobre total asignado en el ciclo 2014-2020 a junio de 2023. Índice capacidad administrativa: índice compuesto normalizado (0-10) elaborado a partir de las cuatro variables precedentes con pesos iguales.

El índice compuesto de capacidad administrativa (columna final de la Tabla 3) resume de manera parsimoniosa estas diferencias: en una escala de 0 a 10, Emilia-Romagna alcanza 8,2 mientras Calabria obtiene 2,4. Esta diferencia de casi 6 puntos en una escala decimal refleja no solo una brecha cuantitativa sino una diferencia cualitativa en el tipo de administración: mientras las regiones del Norte operan sistemas sofisticados de gestión integrada de casos con apoyo digital y alta cualificación del personal, muchos municipios del Sur carecen incluso de los recursos humanos mínimos para tramitar adecuadamente las solicitudes de prestaciones básicas.

5.4. Relación entre variables institucionales y acceso efectivo

El análisis de correlación presentado en la Tabla 4 confirma la robustez de la relación entre capacidad administrativa y acceso efectivo al bienestar. El

índice compuesto de capacidad administrativa muestra una correlación de $r=+0,88$ con la tasa de acceso efectivo, estadísticamente significativa al nivel $p<0,001$. Esta es la correlación más alta de todas las variables analizadas, incluyendo el PIB per cápita ($r=+0,69$), lo que sugiere que la capacidad institucional tiene un efecto sobre el acceso al bienestar que es parcialmente independiente del nivel de desarrollo económico.

Tabla 4. Relación entre variables institucionales y acceso efectivo al bienestar

Variable independiente	Coef. correlación (r) con acceso efectivo	Sig. estadística (p)	Dirección efecto	Interpretación sustantiva
Gasto SS per cápita	+0,84	<0,001	Positivo	Mayor gasto → mayor acceso
Personal SS (% hab.)	+0,81	<0,001	Positivo	Más personal → tramitación más rápida y completa
Índice digitalización	+0,77	<0,01	Positivo	Admin. digital reduce barreras procedimentales
Absorción fondos EU	+0,73	<0,01	Positivo	Mayor capacidad gestión → mejor implementación
PIB per cápita regional	+0,69	<0,01	Positivo	Efecto parcialmente mediado por cap. institucional
Tasa desempleo	-0,71	<0,001	Negativo	Mayor precariedad → mayor demanda no satisfecha
Fragmentación municipal	-0,62	<0,05	Negativo	Más fragmentación → mayor exclusión indirecta
Índice cap. administrativa (compuesto)	+0,88	<0,001	Positivo fuerte	Variable más robusta predictora de acceso efectivo

Nota: Elaboración propia a partir de las Tablas 1, 2 y 3. Coeficiente de correlación de Pearson (r) calculado sobre las 20 regiones italianas (N=20). Significación estadística bilateral. Variable dependiente: tasa de acceso efectivo (Tabla 2). Fragmentación municipal: porcentaje de municipios con menos de 5.000 habitantes sobre el total regional (ISTAT, 2023). Los resultados deben interpretarse como evidencia correlacional, no como relaciones causales establecidas.

Las dimensiones individuales de la capacidad administrativa muestran también correlaciones fuertes y estadísticamente significativas: el gasto en servicios sociales per cápita ($r=+0,84$), el personal de servicios sociales ($r=+0,81$), el índice de digitalización ($r=+0,77$) y la absorción de fondos europeos ($r=+0,73$). La variable de fragmentación municipal —medida como el porcentaje de municipios con menos de 5.000 habitantes sobre el total regional— muestra una correlación negativa significativa ($r=-0,62$), confirmando la hipótesis de que la fragmentación institucional es un mecanismo de exclusión indirecta.

Es relevante señalar que la correlación entre PIB per cápita y acceso efectivo ($r=+0,69$), aunque significativa, es notablemente menor que la del índice de capacidad administrativa ($r=+0,88$). Esto sugiere que las diferencias institucionales tienen un efecto sobre el acceso al bienestar que no es simplemente una función del nivel de desarrollo económico. Dicho de otro modo: una región puede tener una capacidad administrativa relativamente alta en relación a su PIB (caso de Emilia-Romagna o Trentino-Alto Adige), o relativamente baja (caso de Lazio), y estas diferencias se traducen en diferencias en acceso al bienestar que no serían explicadas por los determinantes puramente económicos.

6. DISCUSIÓN

6.1. Interpretación de los resultados

Los resultados del análisis empírico ofrecen evidencia sólida, aunque de naturaleza correlacional, en favor de la centralidad de las variables institucionales para explicar las desigualdades territoriales en el acceso al bienestar en Italia. El hallazgo más robusto —la correlación $r=+0,88$ entre capacidad administrativa y acceso efectivo— sugiere que el diseño institucional y la calidad del aparato administrativo local son predictores más potentes del acceso al bienestar que el nivel de desarrollo económico ($r=+0,69$). Este resultado es coherente con los hallazgos de Rodríguez-Pose y Garcilazo (2015) para el gasto de cohesión europeo, y con los de Charron et al. (2014) para el índice de calidad de gobierno regional.

La paradoja meridional identificada en el análisis —mayor necesidad objetiva acompañada de menor acceso efectivo— confirma la existencia de un "implementation gap" estructural que no se puede reducir simplemente mediante la ampliación de las transferencias financieras nacionales. El caso de la baja absorción de fondos europeos es particularmente ilustrativo: las regiones del Sur reciben asignaciones per cápita muy superiores a las del Norte en el marco de los Fondos Estructurales, pero son sistemáticamente incapaces de gestionar y utilizar efectivamente dichos fondos. Esto demuestra que el problema no es de insuficiencia de recursos financieros en sentido estricto, sino de insuficiencia de capacidad institucional para convertir dichos recursos en servicios y prestaciones efectivos.

La correlación negativa entre fragmentación municipal y acceso efectivo ($r=-0,62$) merece una reflexión adicional. Italia tiene aproximadamente 7.900 municipios, de los cuales más del 70% tienen menos de 5.000 habitantes. Esta estructura atomizada tiene consecuencias especialmente graves en las regiones del Sur, donde los municipios pequeños carecen de la masa crítica de personal y recursos necesaria para gestionar sistemas de bienestar complejos. Dos municipios de 2.000 habitantes no producen, en materia de capacidad administrativa, el equivalente de un municipio de 4.000: los costes fijos de mantener una administración funcional hacen que la fragmentación sea un multiplicador de la incapacidad institucional.

6.2. Confirmación y refinamiento de las hipótesis

La primera hipótesis —a mayor descentralización sin mecanismos de coordinación fuertes, mayor desigualdad territorial en la implementación— se ve confirmada por los datos, aunque requiere una matización importante. La descentralización italiana no es uniforme: las regiones del Norte han desarrollado sistemas de coordinación intrarregional entre la región y sus municipios (mediante planes sociales zonales, sistemas informativos integrados y mecanismos de financiación condicionada) que mitigan parcialmente los efectos de la fragmentación. En el Sur, estos mecanismos de coordinación intrarregional son mucho más débiles, lo que amplifica los efectos negativos de la descentralización. La variable relevante, por tanto, no

es solo la descentralización como tal, sino la calidad de los mecanismos de coordinación que la acompañan.

La segunda hipótesis —la capacidad administrativa local condiciona directamente el acceso efectivo a prestaciones— recibe el apoyo empírico más robusto, con el índice compuesto de capacidad administrativa explicando la mayor parte de la varianza en el acceso efectivo. Esta relación opera a través de múltiples mecanismos: mayor número de trabajadores sociales que facilitan el proceso de solicitud y acompañan a los beneficiarios; mayor digitalización que reduce los tiempos de tramitación y los errores administrativos; mayor capacidad de gestión de programas complejos que requieren la coordinación de múltiples actores (INPS, municipios, centros de empleo, tercera parte social).

La tercera hipótesis —la fragmentación institucional genera exclusión indirecta— es también confirmada, aunque su efecto es estadísticamente menos robusto que el de la capacidad administrativa en sentido estricto. La fragmentación opera como un mecanismo de exclusión indirecta especialmente grave para los ciudadanos más vulnerables: aquellos con menor capital cultural, con barreras lingüísticas (en el caso de la población inmigrante), o con menor capacidad de navegar sistemas burocráticos complejos. Esta selectividad social de la exclusión indirecta convierte la fragmentación institucional en un mecanismo de reproducción de las desigualdades más amplio que el meramente territorial.

6.3. Diálogo con la literatura existente

Los resultados de este análisis están en diálogo directo con varias líneas de la literatura académica. En primer lugar, confirman y amplían las tesis de Kazepov (2010) sobre el "mosaico de bienestar": la reescalación de las políticas sociales hacia el nivel subnacional ha producido un sistema en el que la ciudadanía social efectiva es territorialmente estratificada, con implicaciones graves para la cohesión social nacional. En segundo lugar, cuestionan la narrativa del capital social de Putnam como explicación principal de las diferencias institucionales: si bien el capital social puede

haber desempeñado un papel en la formación histórica de las capacidades institucionales regionales, los datos actuales sugieren que las diferencias se mantienen y reproducen a través de mecanismos institucionales más inmediatos y potencialmente más susceptibles de intervención política.

En tercer lugar, los resultados son coherentes con la literatura sobre "administrative capacity traps" (trampas de capacidad administrativa) (Rodrik, 2004; Andrews et al., 2017): los sistemas de bienestar modernos requieren capacidades administrativas sofisticadas que no pueden ser importadas o trasplantadas en el corto plazo. Las reformas que introducen nuevos instrumentos de bienestar complejos —como el AdI y el SFL— sin abordar simultáneamente la brecha en capacidad administrativa subnacional están condenadas a reproducir y posiblemente ampliar las desigualdades territoriales en el acceso efectivo.

Finalmente, el artículo dialoga con la literatura sobre gobernanza multinivel en la Unión Europea (Bache & Flinders, 2004; Piattoni, 2010; Levi-Faur, 2012). La política de cohesión europea, que destina recursos sustanciales precisamente a las regiones italianas más desfavorecidas, enfrenta el mismo problema: los fondos estructurales son potencialmente eficaces para reducir las brechas de capacidad institucional, pero su efectividad está condicionada por la existencia previa de un nivel mínimo de dicha capacidad. Esta paradoja sugiere la necesidad de políticas europeas de "construcción de capacidad administrativa" previas o simultáneas al despliegue de programas sustantivos de bienestar.

7. CONCLUSIONES

7.1. Aportaciones teóricas

Este artículo ha desarrollado un marco analítico integrado que combina la teoría del Estado de bienestar comparado, la literatura sobre gobernanza multinivel y los enfoques sobre capacidad administrativa, aplicándolo al análisis de las desigualdades territoriales en Italia. La principal contribución teórica consiste en la conceptualización del "implementation gap" como resultado de la interacción entre tres variables institucionales —gobernanza multinivel sin coordinación efectiva, déficit de capacidad administrativa local y fragmentación institucional— cuya combinación produce una forma específica de exclusión social que podría denominarse "exclusión institucional indirecta": la privación del acceso a derechos sociales no por ausencia de reconocimiento formal, sino por incapacidad del aparato administrativo para materializarlos.

Este concepto amplía y precisa las nociones de "hidden inequalities" (desigualdades ocultas) y "non-recours" (no-recurso) existentes en la literatura, al identificar un mecanismo generativo específico —la capacidad administrativa diferencial— y al situarlo dentro de una arquitectura institucional multinivel cuya dinámica de coordinación (o ausencia de ella) es determinante. La contribución metodológica consiste en la construcción de un índice compuesto de capacidad administrativa subnacional que puede ser replicado y refinado en otros contextos nacionales, contribuyendo al desarrollo de herramientas de medición en un campo donde la disponibilidad de datos comparables es limitada.

7.2. Implicaciones para políticas públicas

Las implicaciones de este análisis para el diseño de políticas son directas y exigentes. En primer lugar, las reformas de los programas de bienestar — como la transición del RdC al AdI/SFL— deben ir acompañadas de inversiones proporcionales en capacidad administrativa subnacional, especialmente en las regiones y municipios con mayor déficit. Esto implica tanto recursos humanos (contratación y formación de trabajadores sociales municipales) como infraestructura tecnológica (digitalización de

procedimientos, sistemas de información integrados) y organizativa (mecanismos de coordinación intergubernamental efectivos).

En segundo lugar, la determinación efectiva de los Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) —bloqueada durante más de veinte años— es una condición necesaria pero no suficiente para reducir las desigualdades. Los LEP deben ir acompañados de mecanismos de financiación condicionada que garanticen los recursos necesarios para su cumplimiento, y de sistemas de monitorización y rendición de cuentas que hagan posible identificar y corregir los incumplimientos. Sin estos elementos, los LEP corren el riesgo de convertirse en otro ejemplo de isomorfismo institucional: una norma formal sin capacidad de transformar la realidad institucional.

En tercer lugar, la política de cohesión europea debe integrar explícitamente la dimensión de capacidad administrativa, tanto en el diseño de los programas como en la evaluación de su implementación. Las condicionalidades que ya existen (condicionalidades "habilitadoras" en el ciclo 2021-2027) van en la dirección correcta, pero su aplicación efectiva sigue siendo débil. Una política de cohesión más efectiva requeriría mecanismos de asistencia técnica directa, de evaluación de la capacidad institucional como precondition para la aprobación de programas operativos, y de incentivos financieros ligados a mejoras medibles en capacidad administrativa.

7.3. Líneas futuras de investigación

Este artículo abre varias líneas de investigación futura. En primer lugar, sería necesario un análisis a nivel municipal o provincial que permitiera identificar la variación intra-regional en capacidad administrativa y acceso al bienestar, potencialmente revelando heterogeneidades importantes que el análisis regional no puede capturar. En segundo lugar, el establecimiento de relaciones causales rigurosas requeriría el uso de datos de panel longitudinales y diseños cuasi-experimentales, aprovechando variaciones en la reforma de los programas de bienestar como variaciones de política exógenas. En tercer lugar, el marco analítico desarrollado en este artículo

podría aplicarse comparativamente a otros países con sistemas federales o descentralizados y fuertes disparidades territoriales —España, Alemania, Polonia, Bélgica— para evaluar la generalidad de los mecanismos identificados.

Finalmente, la dimensión de género merece mayor atención: las desigualdades territoriales en el acceso al bienestar tienen efectos diferenciados por género, especialmente en el caso de prestaciones vinculadas al cuidado y al mercado laboral, donde las tasas de participación femenina son especialmente bajas en el Sur. La integración de una perspectiva de género en el análisis institucional podría revelar mecanismos adicionales de exclusión que el análisis territorial en sentido estricto no permite identificar.

8. CONTRIBUCIONES DE AUTORES

La autora Isabel Cánovas Soler ha realizado todas las contribuciones relacionadas con la conceptualización, metodología, interpretación de datos y redacción del manuscrito.

9. REFERENCIAS

- Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Publishers.
- Agranoff, R. (2007). *Managing within networks: Adding value to public organizations*. Georgetown University Press.
- Andrews, M., Pritchett, L. & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.
- Andreotti, A., Mingione, E. & Polizzi, E. (2012). Local welfare systems: A challenge for social cohesion. *Urban Studies*, 49(9), 1925-1940. Local Welfare Systems: A Challenge for Social Cohesion - Alberta Andreotti, Enzo Mingione, Emanuele Polizzi, 2012
- ANPAL (2022). *Rapporto annuale sulle politiche del lavoro attive*. Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

- Bache, I. & Flinders, M. (Eds.). (2004). *Multi-level governance*. Oxford University Press.
- Baldi, B. (2006). *Federalismo*. Il Mulino.
- Banca d'Italia (2021). *L'economia del Mezzogiorno. Note di stabilità finanziaria e vigilanza, nota 22*. Nota di stabilità finanziaria e vigilanza n. 22
- Béland, D. & Lecours, A. (2008). *Nationalism and social policy: The politics of territorial solidarity*. Oxford University Press.
- Bersch, K., Praça, S. & Taylor, M. M. (2017). State capacity, bureaucratic politicization, and corruption in the Brazilian state. *Governance*, 30(1), 105-124. State Capacity, Bureaucratic Politicization, and Corruption in the Brazilian State - Bersch - 2017 - Governance - Wiley Online Library
- Bordignon, M. & Turati, G. (2023). L'autonomia differenziata e le diseguaglianze territoriali. *Rivista di Politica Economica*, 113(1), 7-38. https://economieitaliana.org/wpcontent/uploads/EI_2025_1_01_Editoriale_D-compressed.pdf
- Cento Bull, A. & Jones, P. (2010). *Regionalism in Italy*. Routledge.
- Charron, N., Dijkstra, L. & Lapuente, V. (2014). Regional governance matters: Quality of government within European Union member states. *Regional Studies*, 48(1), 68-90. Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States
- Ciarini, A. (2012). *Le politiche sociali nelle regioni italiane*. Il Mulino.
- Commissione Europea (2022). *Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 — Italy*. Publications Office of the European Union. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022
- Corte dei Conti (2021). Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni — esercizi 2019-2020. *Sezione delle Autonomie*. enti locali, corte conti: la relazione sulla gestione finanziaria 2019-2021
- Dargent, E. (2015). *Technocracy and democracy in Latin America: The experts running government*. Cambridge University Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Eurostat (2023). *Statistics on income and living conditions (EU-SILC)*. European Commission. EU statistics on income and living conditions - Microdata - Eurostat

- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Felice, E. (2013). *Perché il Sud è rimasto indietro*. Il Mulino.
- Ferrera, M. (1996). The 'Southern model' of welfare in social Europe. *Journal of European Social Policy*, 6(1), 17-37. The 'Southern Model' of Welfare in Social Europe - Maurizio Ferrera, 1996
- Ferrera, M. (2005). *The boundaries of welfare: European integration and the new spatial politics of social protection*. Oxford University Press.
- Filgueira, F., Moraes, J. A., Alegre, P. & Midaglia, C. (2006). *Sistemas de protección social en América Latina*. CEPAL-GTZ.
- Giannola, A., Petraglia, C. & Scalera, D. (2016). Net fiscal flows and interregional redistribution in Italy. *Structural Change and Economic Dynamics*, 39, 1-12. Net fiscal flows and interregional redistribution in Italy: A long-run perspective (1951–2010)
- Golden, M. & Picci, L. (2005). Proposal for a new measure of corruption, illustrated with Italian data. *Economics & Politics*, 17(1), 37-75. PROPOSAL FOR A NEW MEASURE OF CORRUPTION, ILLUSTRATED WITH ITALIAN DATA - Golden - 2005 - Economics & Politics - Wiley Online Library
- Hooghe, L. & Marks, G. (2001). *Multi-level governance and European integration*. Rowman & Littlefield.
- Hooghe, L. & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. *American Political Science Review*, 97(2), 233-243. Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance | American Political Science Review | Cambridge Core
- Howlett, M. (2009). Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design. *Policy Sciences*, 42(1), 73-89. (PDF) Governance modes, policy regimes, and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice an policy design
- INPS (2024). *Osservatorio statistico sull'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro — Dati 2023*. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Portale Inps - Osservatorio ADI e SFL: i dati al 31 dicembre 2024

- ISTAT (2023). *Rapporto annuale 2023 — La situazione del Paese*. Istituto Nazionale di Statistica. rapporto annuale 2023 ISTAT
- ISTAT (2023b). *Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati — Anno 2021*. Istituto Nazionale di Statistica. Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati
- Kazepov, Y. (Ed.). (2010). *Rescaling social policies: Towards multilevel governance in Europe*. Ashgate.
- Kazepov, Y. & Barberis, E. (2013). Social assistance governance in Europe. In I. Marx & K. Nelson (Eds.), *Minimum income protection in flux* (pp. 217-246). Palgrave Macmillan.
- Levi, M. (1996). Social and unsocial capital: A review essay of Robert Putnam's Making Democracy Work. *Politics & Society*, 24(1), 45-55. Social and Unsocial Capital: A Review Essay of Robert Putnam's Making Democracy Work - MARGARET LEVI, 1996
- Levi-Faur, D. (2012). *The Oxford handbook of governance*. Oxford University Press.
- Mann, M. (1984). The autonomous power of the state. *European Journal of Sociology*, 25(2), 185-213. The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results | European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2022). *Quaderno della ricerca sociale — I servizi sociali territoriali in Italia*. Ministero del Lavoro. Quaderno della Ricerca Sociale n. 66 - Dati SioSS Report 2024
- Obinger, H., Leibfried, S. & Castles, F. G. (Eds.). (2005). *Federalism and the welfare state: New world and European experiences*. Cambridge University Press.
- OCDE (2020). *Multi-level governance for effective cohesion policy*. OECD Regional Development Papers. OECD Multi-level Governance Studies
- OCDE (2022). *Government at a Glance 2022*. OECD Publishing. Government at a Glance | OECD
- Peck, J. (2012). Austerity urbanism: American cities under extreme economy. *City*, 16(6), 626-655. Austerity urbanism: American cities under extreme economy

- Peters, B. G. & Pierre, J. (2001). Developments in intergovernmental relations. *Policy & Politics*, 29(2), 131-135. Developments in intergovernmental relations: towards multi-level governance
- Piattoni, S. (2010). *The theory of multi-level governance: Conceptual, empirical, and normative challenges*. Oxford University Press.
- Pierson, P. (1995). Fragmented welfare states: Federal institutions and the development of social policy. *Governance*, 8(4), 449-478. Fragmented Welfare States: Federal Institutions and the Development of Social Policy - PIERSON - 1995 - Governance - Wiley Online Library
- Raitano, M. & Fana, M. (2019). Labour market deregulation and workers' outcomes at the beginning of the careers. *Structural Change and Economic Dynamics*, 51, 217-228. Labour market deregulation and workers' outcomes at the beginning of the career: Evidence from Italy
- Ranci, C. & Pavolini, E. (Eds.). (2015). *Reforms in long-term care policies in Europe*. Springer.
- Rodríguez-Pose, A. & Garcilazo, E. (2015). Quality of government and the returns of investment. *Environment and Planning C*, 33(1), 22-47. Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions
- Rodrik, D. (2004). *Getting institutions right*. CESifo DICE Report 2/2004. GETTING INSTITUTIONS RIGHT
- Saraceno, C. (2002). *Social assistance dynamics in Europe*. The Policy Press.
- Snyder, R. (2001). Scaling down: The subnational comparative method. *Studies in Comparative International Development*, 36(1), 93-110. Scaling Down: The Subnational Comparative Method | Studies in Comparative International Development | Springer Nature Link
- Tarrow, S. (1996). Making social science work across space and time: A critical reflection on Robert Putnam's Making Democracy Work. *American Political Science Review*, 90(2), 389-397. Making Social Science Work Across Space and Time: A Critical Reflection on Robert Putnam's Making Democracy Work | American Political Science Review | Cambridge Core
- Trigilia, C. (1992). *Sviluppo senza autonomia*. Il Mulino.
- Viesti, G. (2023). *Contro la secessione dei ricchi*. Laterza.

- Warin, P. (2012). *Le non-recours aux politiques sociales*. Presses Universitaires de Grenoble.
- Weyland, K. (2004). *Bounded rationality and policy diffusion*. Princeton University Press.